

# “MONTEJURRA 76”: UN GOLPE MORTAL AL PRINCIPAL PARTIDO POLÍTICO DE NAVARRA

Manuel MARTORELL PÉREZ  
manumartorell@telefonica.net

La aparición de unos documentos oficiales que contradicen la versión admitida hasta ahora sobre los graves sucesos ocurridos en Montejurra el año 1976 tienen especial trascendencia para Navarra, ya que afectaron de lleno al carlismo, principal movimiento político en la historia contemporánea del Antiguo Reyno, cuando, tras la muerte de Franco, se iniciaba un periodo clave para la transición de la dictadura a la democracia.



Las dos carpetas donde se conservaban los documentos ahora revelados y que están en posesión del Partido Carlista.  
Foto: Manuel Martorell.

Los documentos, fundamentalmente informes y cartas asociados al gobernador civil José Luis Ruiz de Gordo, se conservaban en dos carpetas, una dedicada específicamente a la concentración celebrada el 9 de mayo de ese año y la otra de forma genérica al carlismo navarro. De todos estos documentos, el más revelador, porque vincula directamente al entonces ministro de Gobernación, Manuel Fraga Iribarne, con los preparativos de la operación contra el Partido Carlista es la carta que Ruiz de Gordo remite a su superior el 21 de abril informándole de una entrevista “secreta” ese mismo día en el hotel Tres Reyes de Pamplona con José Márquez de Prado (Pepe Arturo) y Sixto de Borbón-Parma, radicalmente opuesto a la línea democrática y socialista de Carlos Hugo, su hermano mayor.

En ese encuentro, sus interlocutores ya le presentan un plan para “reconquistar” el acto que anualmente se convocaba a comienzos de mayo en la Montaña Sagrada del carlismo, junto a la ciudad

de Estella. Ese plan consistía, fundamentalmente, en actuar sobre la concentración desde tres puntos distintos: la cumbre, que se debería ocupar unos días antes; la plaza del Monasterio de Iruche, para neutralizar la propaganda de los “huguistas”, como se denomina a los seguidores de Carlos Hugo, y desde las campas situadas tras el cenobio para controlar el Via Crucis que desde aquí asciende hacia la cima del monte.



El informe que Ruiz de Gordo envía al ministro de Gobernación, Manuel Fraga, sobre la reunión que ha mantenido con Pepe Arturo y Sixto en el hotel Tres Reyes.

Ruiz de Gordo, siempre siguiendo las orientaciones que Fraga le ha dado previamente por teléfono, les promete el apoyo gubernamental una vez asegurada su fidelidad y reconocimiento al rey Juan Carlos, objetivo que prevalece en los distintos informes y que revela un temor en esferas gubernamentales a que el carlismo enturbiera la consolidación del rey Juan Carlos en el Trono de España. En ese encuentro de Pamplona, Pepe Arturo y Sixto también anuncian al gobernador civil que tienen prevista otra reunión con el director general de Política Interior. Previamente, el propio Fraga y el director general de Seguridad, Víctor Castro Sanmartín, ya le habían apremiado en sendas cartas, fechadas respectivamente el 21 de marzo y 19 de abril, a preparar un plan para hacer frente a lo que Ruiz de Gordo no duda en calificar como el mayor acto contra el régimen que se celebraba en España.

“Creo que ha llegado el momento de que nos ocupemos de la concentración de Montejurra”, le dice Castro Sanmartín, persona cercana al ge-

neral Alfonso Armada y que fue llamada a declarar por el golpe de Estado del 23-F. "Creo que tienes que ir pensando en una división de funciones o de zonas de acción entre la Guardia Civil y la Policía", citando expresamente entre las personas que se debe apoyar a Márquez de Prado y Sixto, mientras presenta a los "huguistas" como una amenaza porque están formando "una especie de guardia de hierro a base de estacas y pistolas". Aún más grave resulta que el principal responsable del orden y la seguridad del país considere "conveniente" a los intereses del Estado un enfrentamiento entre los dos bandos.

Otros documentos que evidencian no sólo la implicación del Gobierno en la *Operación Reconquista* sino en su diseño son el plan "Montejurra Tradicionalista" y la "Orden extraordinaria" para las fuerzas policiales, que, según informará posteriormente el gobernador civil al fiscal de la Audiencia de Pamplona, fue "aprobada por la superioridad". Ambos documentos se refieren explícitamente a la participación de gobernadores civiles y alcaldes, que deben fletar y organizar un centenar de autobuses en una veintena de provincias para trasladar a 5.650 personas, a las que se equipará con brazaletes distintivos -6.000-, boinas rojas -2.000- y "garrotas de campo" -otras 2.000-, más una dieta personal de 750 pesetas.

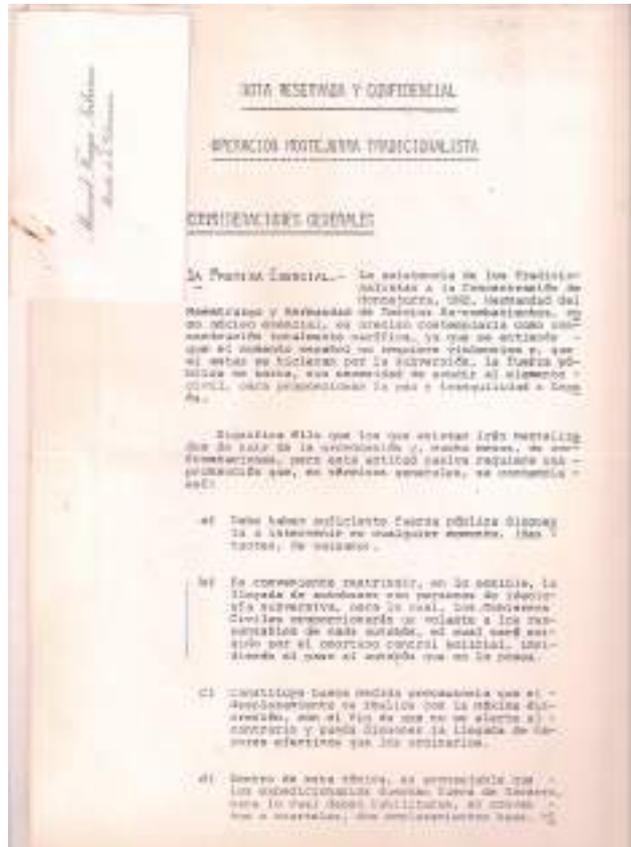


Carta del director general de Seguridad apremiando al gobernador civil de Navarra a preparar una estrategia ante la convocatoria de Montejurra 76.

Tal y como se explicita en ese plan, que lleva adherido una tarjeta personal de Fraga, el peso de la parte civil del operativo recaería sobre la Unión Nacional Española (UNE), asociación legalizada un año antes por Arias Navarro en la que se habían refugiado dirigentes tradicionalistas apartados hacía años de la disciplina del carlismo, entre los que destacan José María Valiente, José Luis Zamamillo, Miguel Fagoaga y Ramón Merino.

En las "Consideraciones generales" del citado plan ni siquiera se disimula la implicación de estructuras y organismo gubernamentales. Así, en el apartado "a", se dice que habrá "suficiente fuerza pública dispuesta a intervenir en cualquier momen-

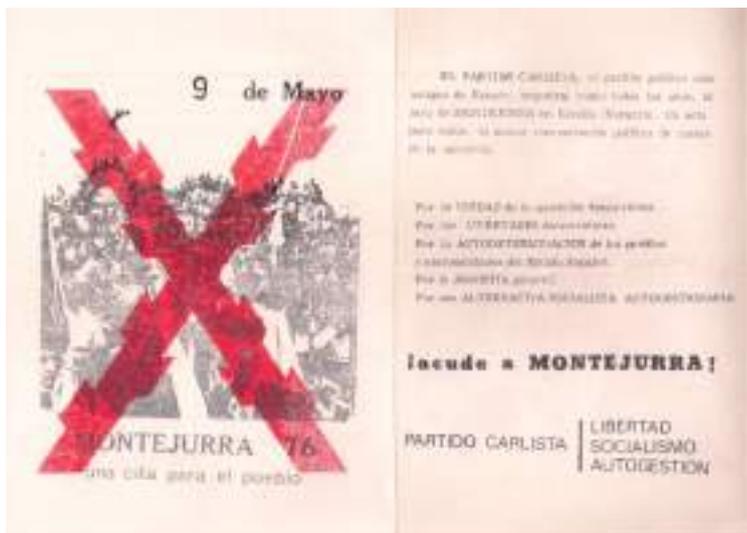
to", especificando que "bastantes" irán "de paisano"; en el "b", que serán los gobiernos civiles quienes expidan los salvoconductos para poder pasar "el oportuno control policial", mientras que el "d" prevé habilitar "conventos o cuarteles" para que los expedicionarios puedan pernoctar y en el "f", que se deberá llevar un "distintivo" (brazaletes) reconocible "por la fuerza pública". El Ministerio de Información se encargaría de difundir propagandísticamente el éxito de la operación.



Primera hoja del plan civil denominado "Montejurra Tradicionalista", al que se adjuntó una tarjeta personal del ministro de Gobernación.

Por su parte, la "Orden extraordinaria" dedicada a las distintas fuerzas policiales tiene una redacción más técnica pero siempre con el objetivo central de localizar e impedir la presencia de los elementos "subversivos", especialmente jóvenes, a los que se identifica con el Partido Carlista. Así se entiende que, por primera vez en muchos años, las patrullas de la Guardia Civil no permitirían acceder a la cumbre, como era habitual, a los carlistas que la víspera realizaban los preparativos para la celebración de la misa y la concentración política, deteniendo incluso a los que se aventuraron a hacerlo. Es lo que les ocurrió a Fernando Lezaun y Antonio Puértolas, que, según el atestado oficial incluido en esta documentación, revelaron a la Guardia Civil la existencia en la cumbre de hombres armados que les amenazaron de muerte, pese a lo cual la Guardia Civil no tomó medida alguna para desarmarlos, manteniendo detenidos a los dos carlistas hasta la noche del domingo.

**"Montejurra 76": un golpe mortal al principal partido político de Navarra**



Panfleto –anverso y reverso- con la convocatoria a “la mayor concentración política de masas de la oposición” el 9 de mayo de 1976.

Otro de los datos reveladores del plan civil estaba en el reconocimiento implícito del escaso apoyo que la convocatoria iba a tener entre los sectores más tradicionalistas del carlismo. En el apartado 4 (Cálculo de asistentes) se informa de que la Hermandad del Maestrazgo, una de las organizaciones inicialmente convocantes, todavía no había dado una respuesta positiva y que la Hermandad de Excombatientes podía “aportar pocos efectivos”. Los atestados de la Guardia Civil no hacen más que confirmar tal extremo al calcular que, frente a los miles de seguidores del Partido Carlista, la UNE apenas había logrado reclutar seiscientas personas.

Algunas de las que llegaron a estar relacionadas con la operación explicarían años más tarde las razones de ese escaso apoyo. Por ejemplo, Carlos Ibáñez Quintana escribe en sus memorias que en Vizcaya rechazaron asistir porque, en el fondo, bajo el liderazgo de Sixto, se pretendía que la Compañía Tradicionalista funcionara “en la nueva monarquía como partido de extrema derecha”, asegurando que “la mayor parte de los que respondieron a la

convocatoria de Sixto fueron engañados e ignoraban lo que se tramaba”. Cita, en este sentido, el revelador ejemplo de Trifón Baquedano, alcalde de Sansol y uno de los más destacados partidarios de Sixto que había en Navarra. Al referirse a los contactos previos, menciona una visita de Trifón y Márquez de Prado a Pablo Izu Solchaga, requeté de Dicastillo, quien se negó a participar porque, según les explicó, tenía datos fidedignos de que intervendrían grupos ultraderechistas. “Cuando Pablo terminó de hablar –recuerda Carlos Ibáñez- dijo Trifón a Márquez de Prado: ‘Ves... tampoco este está de acuerdo. Yo no tengo más remedio que acompañarte porque te he dado mi palabra, pero cada vez estoy más arrepentido”.

Otro testimonio semejante es el de Patricio Gutiérrez de Cabiades en la revista “Ahora Información” con motivo del veinte aniversario de aquellos acontecimientos. En un largo artículo, explica que “en Montejurra 76 existió una mano negra que, aplicando el más refinado maquiavelismo, actuó de forma inmisericorde y sin escrúpulos con la intención de arrastrar al fango a todo el carlismo”. Después, menciona una cena en un restaurante de Madrid con personas que luego participarían en la operación. En un momento dado, apareció el rey Juan Carlos acompañado



*Ultraderechistas internacionales que acompañaban al “hombre de la gabardina” –derecha- en el momento de echar mano a la pistola con la que disparó a Aniano Jiménez.*

Partido Carlista.



Instante en que Aniano Jiménez –centro- recibe el disparo del “hombre de la gabardina” que le provocaría la muerte.

Carlos Corcho/  
Fundación Mur.

por el general Alfonso Armada, asesor del monarca y jefe de su Casa Real, saludando a los presentes antes de sentarse con un grupo de militares en otra mesa. Uno de los comensales dio entonces, subido a una silla, varios gritos a favor de Juan Carlos. Ese joven sería visto el día 9 por la mañana, junto al hotel Irache, organizando los grupos de seguridad que atacarían la zona del Monasterio. También revela ese testimonio que varios autobuses tenían previsto salir desde la madrileña Secretaría General del Movimiento, organismo con rango de Ministerio en esos momentos presidido por Adolfo Suárez.

La figura del rey Juan Carlos también aparece en el testimonio personal de Ramón Merino, dirigente y fundador de la UNE, que, según la documentación ahora difundida, mantuvo un encuentro con Ruiz de Gordoia la misma víspera de Montejurra, el sábado 8 de mayo. Durante la entrevista, ambos hablaron por teléfono con el monarca, que el día anterior, 7 de mayo, había firmado junto al ministro de Exteriores, José María de Areilza, la concesión de la Gran Cruz de Isabel la Católica al gobernador civil de Navarra por “los muchos y difíciles servicios prestados”, tal y como le comunicaría por carta el propio Fraga Iribarne. El Ministerio de Exteriores también fue quien advirtió al Gobierno de los Países Bajos del peligro que corrían Carlos Hugo y su esposa, la princesa Irene de Holanda, si acudían ese año a Montejurra.

Lo ocurrido ese domingo 9 de mayo es suficientemente conocido. Ante la inesperada resistencia encontrada, tanto en el Monasterio de Irache como en la cumbre, los ultraderechistas hicieron uso de sus armas con el resultado de dos muertos: Aniano Jiménez y Ricardo García Pellejero. Hubo también una treintena de heridos y, entre los atacantes, sobresalieron grupos ultraderechistas italianos, argentinos y franceses implicados en sangrientos atentados terroristas, además de ex - agentes de la PIDE portuguesa, de la DINA chilena y de guerrilleros de Cristo Rey. Algunos de estos matones sirvieron después como guardaespaldas de Fraga y otros formaron parte de los GAL, dedicándose a asesinar miembros de ETA en el sur de Francia. Después se sabría, tal y

como denunció el general Sáenz de Santa María, que esos ultraderechistas habían sido contratados por el Seced, el Servicio Central de Documentación, los servicios secretos creados por Carrero Blanco.

Igualmente resultan de gran interés las valoraciones que Ruiz de Gordoia eleva el 15 de mayo “a mi respetado Sr. Ministro y querido amigo” con copia “en idénticos términos al Presidente del Gobierno”, reconociendo el “fracaso total” y la “escasa o nula efectividad” de la operación, entre otras razones porque no funcionaron los controles preventivos que, en su opinión, se debían haber montado en las provincias de origen, lamentando, finalmente, que los disparos efectuados “por varios desequilibrado e insensatos” hubieran echado por tierra un “enfrentamiento que no debió pasar de la garrota de campo”. “La facción de D. Sixto –añade- llegó tarde, desorganizada y muy mermada en relación al cálculo que habían efectuado la víspera”, con una influencia “muy débil” en Navarra, además de que “elementos influyentes del tradicionalismo ortodoxo” habían dado “instrucciones de última hora para no asistir”, entre ellos la Hermandad del Maestrazgo, inicialmente comprometida.

Pero el gobernador civil también insiste en que “los Zabala, Zubiaga, Zuffía, Marchelina, etc. ejercían unas actividades agresivas que suponían una ofensa contra nuestro Rey D. Juan Carlos I que no se podían tolerar”. Se refería así al secretario general del Partido Carlista, Pepe Zavala, mano derecha de Carlos Hugo, y a otras destacadas figuras del carlismo, como el abogado guipuzcoano Gabriel Zubiaga, el navarro Mariano Zuffía y el andaluz Ignacio Romero Osborne, “marqués de Marchelina”, que habían sido requeetés en la Guerra Civil y ahora defendían, como muchos otros excombatientes, los postulados progresistas del carlismo. Entre ellos sobresale la figura de “Marchelina”, comandante mutilado, presidente de la Hermandad de Antiguos Combatientes del Requeté e impulsor de otra asociación homónima de la Guerra de España junto a destacadas personalidades de la cultura y la política, como el socialista Tierno Galván, el dramaturgo Antonio Buero Vallejo o Joaquín Ruiz Jiménez.

## "Montejurra 76": un golpe mortal al principal partido político de Navarra



Algunas de las publicaciones que destacaron la gravedad de lo ocurrido en Montejurra y que reclamaron una explicación al Gobierno de Arias Navarro.

Tras una inicial asunción de toda la responsabilidad por lo ocurrido nada más aterrizar en Barajas procedente de Venezuela, Fraga lanzó la tesis de que todo había sido una "pelea entre hermanos" y que ni el Gobierno, ni el Ministerio, ni el gobernador civil eran responsables, habiendo actuado las fuerzas de seguridad acorde a las circunstancias. Obviamente, no se logró desalojar al Partido Carlista de Montejurra, pero sí se consiguió asestarle un golpe mortal al prestigio que había alcanzado ante la opinión pública, destruyendo la imagen de organización democrática y progresista para vincularlo a grupos extremadamente violentos y reaccionarios.

nez, fundador de la prestigiosa revista "Cuadernos para el Diálogo". El Gobierno le había retirado la Medalla de San Hermenegildo por defender a los miembros de la Unión Militar Democrática (UMD) y la amnistía para los presos políticos, organizando actos de convivencia y confraternización entre excombatientes tanto del Ejército republicano como del denominado "bando nacional".

Los sucesos de Montejurra provocaron una verdadera consternación nacional, sobre todo al comprobar cómo grupos terroristas internacionales habían actuado tan impunemente en territorio español contra una concentración pacífica. La gravedad de lo ocurrido quedó reflejada en los principales periódicos y revistas, en esos años de gran difusión pública, señalando al Gobierno Arias Navarro como máximo responsable. Si tres meses antes los sucesos de Vitoria —cinco trabajadores muertos y 150 heridos al ser disuelta a tiros una asamblea de obreros en huelga— habían puesto en cuestión el "espíritu del 12 de febrero" para ampliar el abanico ideológico del Movimiento, Montejurra 76 disipó cualquier esperanza en el proyecto reformista de Arias Navarro. Dos meses después, era sustituido por Adolfo Suárez, iniciándose así el proceso de transición a la democracia. Mientras tanto, el juzgado de Estella abrió diligencias que terminarían en el Tribunal de Orden Público (TOP) de Madrid, dirigiendo la fiscalía las primeras investigaciones hacia el gobernador civil de Navarra, al mismo tiempo que la acusación particular exigía imputar a instancias superiores del Gobierno y reclamaba la declaración de Fraga.

Hay que recordar, en este sentido, que esa corriente del carlismo era en esos años la única con cierto apoyo popular y con capacidad de actuar públicamente, sobre todo en Navarra pero también en algunas zonas de la Cataluña interior y del País Valenciano, habiendo barrido de la escena política a los sectores más tradicionalistas. En la actual Comunidad Foral era capaz de organizar campañas electorales a las Cortes o para los ayuntamientos por el llamado Tercio Familiar y ganarlas tras cosechar decenas de miles de votos, editaba publicaciones de amplia difusión y organizaba actos a los que acudían miles de personas. A finales de los años 60, cuando todavía no había aparecido ninguno de los grupos izquierdistas que tanto abundarían en el tardofranquismo, el Viejo Reyno era ya una de las regiones donde el sentimiento antifranquista estaba más extendido, debido, en buena parte, al posicionamiento contra la dictadura de este carlismo mayoritario junto a los sectores igualmente católicos vinculados a la HOAC, organización a la que pertenecía Aniano Jiménez, el carlista santanderino asesinado en Montejurra.

Resulta bien significativo que el Partido Carlista tuviera en esos años cientos de militantes en Navarra mientras el Partido Comunista de España (PCE) apenas contaba con una decena. Impulsor de la Federación Obrera Socialista (FOS), organización clandestina con notable presencia en el cinturón industrial de Pamplona, apoyó el Pacto por la Libertad del PCE en 1972 y en 1974 fundó, también con el PCE, la Junta Democrática y después la denominada Platajunta (1976), rechazando



Acuarelas realizadas por Raúl Ibáñez Maya de Ariano Jiménez –izquierda– y Ricardo García Pellejero, asesinados en Montejurra.

do, como el resto de la oposición, la continuidad del franquismo bajo la monarquía de Juan Carlos.

La documentación, en definitiva, evidencia lo que desde el principio se sospechaba y el Partido Carlista siempre denunció: la implicación directa del Gobierno, especialmente del Ministerio de Gobernación en manos de Fraga pero también la del Ministerio de Exteriores, la del Ejército, no solo por la disposición de cuarteles para el operativo sino porque en esos momentos la Guardia Civil todavía formaba parte de las Fuerzas Armadas, así como la de Información y Turismo, para terminar con el ministro-secretario del Movimiento, Adolfo Suárez, del que dependían los jefes provinciales, cargo que iba aparejado al de gobernador civil y que, además, tanto en los sucesos de Vitoria como en los de Montejurra, tuvo que sustituir a Manuel Fraga al frente de las fuerzas de seguridad al encontrarse el titular de Gobernación fuera de España.

Quienes decretaron la amnistía en 1977, autoexculpándose, como al resto de los implicados al situar el límite temporal de su aplicación en diciembre de 1976, se encargaron, al mismo tiempo, de mantener en la ilegalidad al Partido Carlis-

ta, que no pudo participar en las primeras elecciones tras la muerte de Franco pese a haber sido el segundo partido, después del poderoso PCE, en presentar precandidaturas por casi todas las circunscripciones electorales. Jamás se podrá saber si, en condiciones "normales", sin el desprestigio provocado por la versión oficial de aquellos acontecimientos, hubiera logrado representación parlamentaria, como históricamente había conseguido en Navarra.

Otra de las revelaciones de esta documentación se refiere a que en 1996 llegó a manos del escritor y periodista Ignacio Ochoa de Olza, "Iñaki Desormais", que la puso a disposición de un historiador de la UPNA pero, entonces, nadie se atrevió a publicarla. Por este motivo, en una de sus "cartas al director", insertada en la edición de El País el 31 de julio de 2000, hacía un llamamiento a los "historiadores, escritores, periodistas y foros melancólicos en general" para que rectificaran una "versión angelical de la transición" que ha presentado como paladines de la democracia a quienes, en realidad, participaron en un crimen de Estado. **P**

*El autor es periodista e historiador*